Mandatos del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; de la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

REFERENCIA:
AL PER 6/2017

02 de agosto de 2017

Excelencia,

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted en nuestra calidad de Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; de Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; de Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; de Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y de Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de conformidad con las resoluciones 35/7, 28/11, 34/18, 32/32 y 34/5 del Consejo de Derechos Humanos.

En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con alegaciones de acusaciones penales, violaciones al debido proceso, y campañas de difamación en medios de comunicación en contra de los defensores de derechos humanos **Jennifer Moore** y **John Dougherty**.

La Sra. Jennifer Moore es una defensora de derechos del medio ambiente canadiense que trabaja para la organización no-gubernamental Mining Watch Canada, como Coordinadora de Programas sobre América Latina.

El Sr. John Dougherty es un defensor de derechos del medio ambiente, periodista y cineasta estadounidense. Es el director del documental Flin Flon Flim Flam, que problematiza sobre la actividad de la empresa minera canadiense Hubday Minerals, y sobre el impacto en materia de derechos humanos de sus operaciones en las Américas.

Según la información recibida:

Entre el 15 de abril y el 23 de abril 2017, la Sra. Moore y el Sr. Dougherty se encontraban en Perú para participar en la proyección del documental Flin Flon Flim Flam, que denuncia la contaminación del medio ambiente, la violencia contra los defensores de derechos humanos que luchan por la defensa de sus tierras, y la represión policial de manifestaciones en contra de las actividades mineras de Hubday Minerals en Canadá, Guatemala y Perú. El documental fue proyectado de forma gratuita en reuniones públicas en la provincia de Chumbivilcas, Departamento del Cusco, donde se halla una de las principales minas operadas por Hubday Minerals. Las proyecciones contaron con el apoyo de

organizaciones civiles peruanas, asociaciones comunitarias y autoridades locales. Diversos hechos preocupantes habrían tenido lugar antes, durante y después de la estadía de la Sra. Moore y del Sr. Dougherty en Perú.

Antes de llegar a Cusco, la Sra. Moore y el Sr. Dougherty habrían sido objeto de un artículo anónimo y difamatorio publicado en el periódico El Montonero el 10 de abril, y reimpresso por El Diario del Cusco el 11 de abril. El artículo acusaba a las organizaciones Human Rights Without Borders y CooperAcción, así como a la Sra. Moore, de querer impedir el desarrollo económico de la región y de intentar “conducirnos hacia el ejemplo del fracaso chavista”. Asimismo, el autor anónimo afirmaba en el texto que el activismo en contra de Hubday Minerals se basaba en mentiras, toda vez que “es imposible que alguna empresa minera contamine el agua porque operan con modernas tecnologías proambiente”.

El 20 de abril 2017, en la ciudad de Santo Tomas, en Chumbivilcas, dos policías habrían acudido al hotel donde se hospedaban la Sra. Moore y el Sr. Dougherty para pedir información personal sobre ellos al dueño del hotel. Ese mismo día, el alcalde de Santo Tomas anuló la proyección que se llevaría a cabo en la ciudad sin explicación alguna. Simultáneamente, en la localidad de Chamaca, líderes comunitarios habrían sido cuestionados por la policía y por representantes de empresas sobre la proyección del documental. Más tarde ese día, las autoridades de Chamaca no acudieron a la proyección agendada, a pesar de haber dicho originalmente que lo harían.

El 21 de abril 2017, durante una proyección pública del documental en el Centro Cultural Municipal de Cusco, dos policías turísticos habrían entrado al evento, diciendo que habían recibido quejas que algunos “hippies” estaban haciendo demasiado ruido. Alrededor de las 20:20, al salir del Centro Cultural Municipal, la Sra. Moore y el Sr. Dougherty habrían sido rodeados y detenidos por entre 15 y 20 policías nacionales, casi todos vestidos de civil, así como por oficiales de migración, presuntamente sin tener una orden de arresto. A las 21:00, dos policías habrían acompañado a la Sra. Moore a su cuarto de hotel para recuperar su pasaporte. La Sra. Moore y el Sr. Dougherty habrían sido detenidos durante cuatro horas y grabados sin explicación ni consentimiento de su parte, antes de ser puestos en libertad.

Desde su detención y hasta dos meses después de ella, los abogados de la Sra. Moore y el Sr. Dougherty no tuvieron acceso al expediente del caso. Sin embargo, se pudo confirmar posteriormente que la Sra. Moore y el Sr. Dougherty se encuentran bajo acusaciones de amenazas al orden y a la seguridad nacional, así como de participar en actividades lucrativas no permitidas por su estatus migratorio.

La mañana del 22 de abril de 2017, el Ministro del Interior habría publicado una declaración pública en su sitio web diciendo que la Sra. Moore y el Sr. Dougherty eran culpables de haber incitado comunidades a la violencia y de amenazar al

orden interno del país. La declaración hacía referencia a manifestaciones que sucedieron en 2016 cerca de la mina Constancia en Chumbivilcas, operada por Hubday Minerals. Según el Ministerio, dichas protestas habían sido “muy violentas”. La declaración también hacía referencia a Hubday Minerals, afirmando que la empresa “tiene todos los permisos necesarios del estado para operar en el país”.

Atendiendo los consejos de sus abogados, la Sra. Moore y el Sr. Dougherty salieron de Perú de manera voluntaria el 23 de abril de 2017. Más tarde ese día, el Superintendente Nacional de Migraciones habría publicado una resolución que aplicaba una alerta migratoria de duración no definida contra ambos defensores en caso de regresar a Perú.

Tres artículos difamatorios fueron publicados por autores anónimos en El Montonero el 24 de abril de 2017, el 3 de mayo de 2017 y el 8 de mayo de 2017. En ellos se formulaban sospechas sobre el financiamiento de la Sra. Moore y del Sr. Dougherty, así como de las organizaciones Human Rights Without Borders y CooperAcción. Además, los dos últimos artículos sugerían la implicación de la Sra. Moore y el Sr. Dougherty en la quema de camiones de la minera de Hubday, y alegaban que ambos habían sido deportados de Perú y que estaban intentando regresar desde Bolivia para continuar su campaña en contra de las mineras en el sur de Perú.

Finalmente, el 28 de abril de 2017, un cartel de busca y captura con una foto de la Sra. Moore y la leyenda “se busca a Jennifer Moore, canadiense”, habría sido visto en la oficina de la policía en el aeropuerto de Cusco.

Se expresa grave preocupación por las acusaciones penales en contra de la Sra. Moore y del Sr. Dougherty, que estarían relacionadas con sus labores como defensores de derechos humanos, con la muestra y promoción del documental Flin Flon Flim Flam, y con su participación en el movimiento social y ambiental que se opone a las violaciones de derechos humanos que resultarían de las actividades de la empresa minera Hubday Minerals en Perú. Igualmente nos preocupan las alegaciones de faltas al debido proceso en los casos judiciales en su contra, particularmente con relación a su detención sin orden de arresto y la falta de acceso de sus abogados a los expedientes del caso. Finalmente, nos preocupa la publicación en medios de comunicación de alegaciones graves y difamatorias en su contra, y que tienen el efecto de estigmatizarlos frente a la sociedad en general.

Sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos alegados y las preocupaciones mencionadas, sírvase encontrar adjunto el **Anexo de referencias al derecho internacional de los derechos humanos** el cual resume los instrumentos y principios internacionales pertinentes.

Es nuestra responsabilidad, de acuerdo con los mandatos que nos han sido otorgados por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar los hechos traídos a

nuestra atención. Estaríamos entonces muy agradecidos si pudiéramos obtener sus observaciones sobre los siguientes asuntos:

1. Sírvese proporcionar información y cualquier comentario que tenga sobre las alegaciones antes mencionadas.
2. Sírvese proporcionar información detallada sobre las razones de la detención de la Sra. Moore y del Sr. Dougherty el 21 de abril de 2017, así como sobre la orden de arresto correspondiente, o la ausencia de ésta.
3. Sírvese proporcionar información sobre las acusaciones penales en contra de la Sra. Moore y del Sr. Dougherty, y en particular sobre su fundamento legal y factual, así como sobre su compatibilidad con los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Sírvese explicar, asimismo, los motivos por los cuales les fue negado el acceso al expediente durante dos meses a los abogados de la Sra. Moore y del Sr. Dougherty.
4. Sírvese proporcionar información sobre la base legal de la alerta migratoria decretada en contra de la Sra. Moore y del Sr. Dougherty, así como sobre su periodo de vigencia.
5. Sírvese proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de su Excelencia para garantizar la libre difusión del documental Flin Flon Flim Flam, de conformidad con el artículo 19 del PIDCP. Asimismo, sírvese proporcionar información sobre las investigaciones en curso para esclarecer las alegaciones sobre intimidaciones recibidas por comunidades y autoridades locales para impedir la difusión del documental.
6. Sírvese proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de su Excelencia para garantizar que la Sra. Moore y el Sr. Dougherty tengan acceso a un recurso efectivo para la protección de sus derechos e intereses, y para, en caso de ser pertinente, obtener una reparación adecuada.
7. Sírvese proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de su Excelencia para garantizar que la empresa Hubday Minerals implemente los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
8. Por favor indiquen las medidas adoptadas, tanto inmediatas como estructurales, para garantizar que los y las defensoras de derechos humanos, incluidos los defensores de los derechos medioambientales, puedan llevar a cabo su labor sin miedo a sufrir actos de estigmatización, intimidación, acoso o represalias de ningún tipo.

Agradeceríamos recibir una respuesta del Gobierno de Su Excelencia a estas preguntas antes de 60 días. Garantizamos que la respuesta del Gobierno de Su Excelencia

será incluida en el informe que presentaremos al Consejo de Derechos Humanos para que le examine.

Le informamos asimismo que tenemos la intención de enviar en el futuro próximo cartas similares dirigidas a la empresa Hubday Minerals y al Gobierno de Canadá expresando alegaciones y preocupaciones relacionadas al caso.

A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos de las organizaciones, asociaciones y defensores de derechos humanos e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan.

Acepte, Excelencia, la expresión de nuestra más distinguida consideración.

Surya Deva

Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas

John H. Knox

Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible

David Kaye

Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión

Annalisa Ciampi

Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación

Michel Forst

Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Anexo

Referencias al derecho internacional de los derechos humanos

En relación con las alegaciones y, sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre los estándares y normas internacionales aplicables a los asuntos expuestos con anterioridad.

Quisiéramos referirnos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cual Perú ratificó el 28 de abril de 1978, y en particular a sus artículos 9, 14, 19 y 21, que establecen el derecho a la libertad y a la seguridad personales, a la presunción de inocencia mientras no se pruebe culpabilidad conforme a la ley, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Recordamos al Gobierno de su Excelencia que estas obligaciones, según las interpretó el Comité de Derechos Humanos en su Observación General No. 31, implican, no sólo el respeto directo por parte de todas las autoridades del Estado a dichas libertades, sino también la protección contra los actos de particulares o de entidades privadas que obstan a su disfrute.

En relación con la libertad de opinión y expresión, estimamos pertinente hacer referencia a la resolución 12/16 del Consejo de Derechos Humanos, la cual insta a los estados a garantizar el derecho a la libertad de expresión en virtud de ser un pilar fundamental de una sociedad democrática. La resolución subraya también la importancia del pleno respeto de la libertad de difundir información y la importancia del acceso a dicha información para la participación democrática, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Asimismo, la resolución insta a los estados a que garanticen que las víctimas de violaciones al derecho a la libertad de expresión puedan interponer recursos eficaces para investigar efectivamente las amenazas y actos de violencia, así como los actos terroristas, dirigidos contra los periodistas, incluso en situaciones de conflicto armado, y llevar ante la justicia a los responsables de esos actos, para luchar contra la impunidad.

Con respecto a los derechos a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, nos permitimos hacer referencia a la resolución 15/21 del Consejo de Derechos Humanos, y en concreto, al párrafo operativo 1 donde se “exhorta a los Estados a que respeten y protejan plenamente el derecho de todas las personas a la libertad de asociación y de reunión pacíficas, (...) y con inclusión de las personas que abracen convicciones o creencias minoritarias o disidentes, los defensores de los derechos humanos, las personas afiliadas a sindicatos y las demás personas, incluidos los migrantes, que traten de ejercer o promover esos derechos y a que adopten todas las medidas necesarias para asegurar que cualquier restricción del libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas sea conforme con las obligaciones que les incumben en virtud de las normas internacionales de derechos humanos.”

Deseamos llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre las normas fundamentales enunciadas en la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el

deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. En particular, quisiéramos referirnos a los artículos 1 y 2 que declaran que toda persona tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y que cada Estado tiene la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Además, quisiéramos referirnos a la resolución 22/6 del Consejo de Derechos Humanos que insta a los Estados a reconocer públicamente la importante y legítima función que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la promoción de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho

Quisiéramos también llamar la atención del Gobierno de su Excelencia a los siguientes artículos de la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos:

-el artículo 5(a) y (b), que establece el derecho a reunirse o manifestarse pacíficamente, y a formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse y participar en ellos;

-el artículo 6(a) y (c), que establece el derecho a conocer, obtener, y poseer información sobre derechos humanos, y a estudiar y debatir si los derechos humanos están siendo observados, tanto en ley como en práctica.

-el artículo 12, que establece que el Estado debe garantizar la protección de toda persona frente a toda amenaza, represalia, o presión resultante del ejercicio de los derechos autorizados por la Declaración, al igual que el derecho a una protección eficaz de las leyes al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades que causen violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales.

Finalmente, quisiéramos también llamar la atención a los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos (A/HRC/17/31). Los Principios rectores clarifican que bajo las obligaciones internacionales de derechos humanos “los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas” (principio 1). Esto requiere que los Estados deben “enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades” (principio 2). En particular, esto incluye que las empresas adopten un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos con el fin de identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que puede verse implicadas ya sea a través de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales (principios 17-21). También, los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces” (principio 25). Los Principios rectores también enfatizan que “Los Estados deben asegurarse [...] que no se pongan obstáculos a las actividades legítimas y pacíficas de los defensores de los derechos humanos” (comentario al principio 26).